**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
1811/2022**

**QUEJOSA: GRUPO EDITORIAL
NOTMUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE**

**RECURRENTES: INGRID CORONADO
FRITZ Y OTRO (TERCEROS
INTERESADOS)**

PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

**SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ
COLABORÓ: MARIANA PÉREZ ATHIÉ**

En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: **“PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”**¹, a continuación, se hace público el fragmento del proyecto de sentencia del amparo directo en revisión 1811/2022, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo:

(...)

29. Si bien en el presente asunto el problema jurídico que en específico esta Sala debe dilucidar consiste en determinar si la aplicación del segundo párrafo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor a efecto de cuantificar la indemnización en casos de violación al derecho a la propia imagen resulta violatoria del derecho humano a una reparación integral o no; para estar en posibilidad de estudiar los

---

¹ Tesis de Jurisprudencia P./J. 53/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, noviembre de 2014, página 61.

argumentos de la recurrente se estima necesario establecer las premisas a partir de las cuales dichos argumentos serán analizados.

30. En consecuencia, en primer lugar, se hará una breve relación de cuestiones esenciales respecto a la doctrina constitucional sobre el derecho de autor y sobre el derecho a la propia imagen y su regulación. Posteriormente, a partir de la correcta interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la doctrina constitucional que sobre dicha norma esta Primera Sala ha establecido, se determinará si la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado fue correcta o no y si con ésta se garantiza el derecho humano a una justa indemnización.

Doctrina constitucional sobre el derecho de autor.

31. El derecho de autor se encuentra reconocido a nivel constitucional en el artículo 28 de la Constitución Política del país; a nivel internacional se reconoce en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de forma particular en la Ley Federal del Derecho de Autor². Es criterio de esta Sala que al autor le

---

² **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:**

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

[...]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo 1o. La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus

corresponde una dualidad de derechos en relación con su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera intangible.³ Por lo tanto, cuenta, por un lado, con **derechos patrimoniales**, a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la concesión de derechos por su reproducción, a obtener regalías o por su venta como un bien material. Asimismo, cuenta con **derechos de naturaleza moral**, tales como integridad y titularidad de la obra, de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra.⁴

32. Respecto a la vertiente patrimonial, esta Sala ha establecido que el derecho a la propiedad (en general) constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política del país y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el derecho a la *propiedad intelectual* ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, incluida específicamente en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución federal y 15, numeral 1, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y debe entenderse como el *derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor* y aquellos de naturaleza industrial, en los términos de las legislaciones respectivas.⁵

---

manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

³ Tesis 1a. CCVIII/2012, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, septiembre de dos mil doce, página 504 de rubro **DERECHOS DE AUTOR. PROTEGEN TANTO DERECHOS PATRIMONIALES COMO MORALES.**

⁴ Amparo directo en revisión 4040/2019, párrafo 31.

⁵ Tesis Aislada 1a. CLXXVIII/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2018, página 287, con número de registro 2018640, de rubro **DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL.**

33. Conforme a lo determinado por el Pleno de esta Suprema Corte⁶, esta vertiente patrimonial de los derechos de autor puede clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos dentro de los que se encuentran los de simple remuneración —como el de *regalías*—, previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor⁷, el cual constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica o transmite públicamente la obra por cualquier medio; derecho que, además, es distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8⁰⁸ y 9⁰⁹ del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor a que se refieren, por ejemplo, las contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho derecho estipulado en el contrato respectivo.¹⁰

---

⁶ Tesis de Jurisprudencia P./J. 102/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 6, con número de registro 170786, de rubro **DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO.**

⁷ **Artículo 26 Bis.-** El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley.

⁸ **Artículo 8o.-** Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por regalías la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o medio.

⁹ **Artículo 9o.-** El pago de regalías al autor, a los titulares de derechos conexos, o a sus titulares derivados, se hará en forma independiente a cada uno de quienes tengan derecho, por separado y según la modalidad de explotación de que se trate, de manera directa, por conducto de apoderado o a través de las sociedades de gestión colectiva.

¹⁰ Amparo directo en revisión 4040/2019, párrafo 35.

Doctrina constitucional sobre el derecho a la propia imagen.

Derecho a la propia imagen.

34. Al resolver el **amparo directo 6/2008**¹¹, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si bien no se encuentra previsto de forma expresa en la Constitución, el **derecho a la propia imagen tiene el carácter de derecho fundamental y proviene de la dignidad humana**. En ese sentido, se precisó que de la dignidad humana se derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para el desarrollo íntegro de la personalidad.¹²
35. Asimismo, el Pleno señaló que este principio está implícitamente reconocido en el artículo 1° Constitucional, pues en éste se prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, la cual engloba, entre otros derechos, el derecho a la intimidad y a la propia imagen.¹³
36. Respecto al derecho a la propia imagen, el Pleno señaló que *“implica la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás y que, como tal, gran parte de la doctrina ubica, a su vez, dentro del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos personalísimos, pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas”* por lo que *“El individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.”*¹⁴

---

¹¹ Resuelto en sesión del 6 de enero de 2009 por unanimidad de once votos de los Señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

¹² Amparo directo 6/2008, página 85.

¹³ De dicho precedente derivaron las tesis de rubro: **“DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA”** Tesis aislada P. LXVII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XXX, diciembre de 2009, registro 165821; y **“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES”** Tesis aislada P. LXV/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XXX, diciembre de 2009, registro 165813.

¹⁴ Amparo directo 6/2008, página 88.

37. Por su parte, al resolver el **amparo directo en revisión 3619/2015**¹⁵, esta Primera Sala determinó que el contenido del derecho a la propia imagen se delimita estableciendo, tanto un aspecto positivo de ese derecho -consistente en la facultad de las personas de publicar o difundir su propia imagen-, como un aspecto negativo -consistente en la facultad de autorizar o impedir la reproducción de su imagen-.¹⁶

Regulación del derecho a la propia imagen en la Ley Federal del Derecho de Autor.

38. En el **amparo directo en revisión 49/2013**¹⁷ esta Primera Sala reiteró que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental que deriva del reconocimiento de la dignidad humana. En ese sentido, precisó que esta estrategia argumentativa -consistente en derivar el derecho a la propia imagen de otros derechos fundamentales- ha sido practicada en el ámbito internacional por tribunales especializados en derechos humanos.¹⁸ Tal como en el caso **Schüssel v Austria**¹⁹ en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la protección de la vida privada derivada del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos comprende elementos de la identidad de una persona entre los que se incluye la imagen de ésta, doctrina que posteriormente fue reiterada en **Von Hannover v Germany**.²⁰

¹⁵ Resuelto en sesión del 7 de diciembre de 2016, por mayoría de tres votos de la señora Ministra y los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reservó el derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta), quien se reservó su derecho a formular voto concurrente; en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

¹⁶ Amparo directo en revisión 3619/2015, párrafo 79.

¹⁷ Resuelto en sesión del 19 de noviembre de 2014, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente.

¹⁸ Amparo directo en revisión 49/2013, páginas 25-26.

¹⁹ Sentencia de 21 de febrero de 2002.

²⁰ Sentencia de 24 de septiembre de 2004.

39. En ese contexto, en el amparo directo en revisión 49/2013 en comento, esta Primera Sala explicó que, si bien podría parecer extraño que en la legislación autoral se incluyan disposiciones relacionadas con el derecho a la propia imagen, la existencia de estas normas se justifica por la necesidad de contar con criterios que permitan resolver los potenciales conflictos que puedan surgir entre los derechos del autor y los del titular de la imagen. En ese sentido se precisó²¹ que *“en el derecho comparado este tipo de disposiciones normalmente regulan situaciones donde concurren derechos autorales de una persona y el derecho a la imagen de otra persona, como en aquellos casos en los que alguien capta o plasma esa imagen a través de una pintura, un dibujo, una fotografía o algún otro medio audiovisual.”*²²
40. Asimismo, se destacó que, en el caso mexicano, la regulación va mucho más allá de establecer criterios que permitan resolver los posibles conflictos entre los derechos del autor y los del titular de la imagen. Lo anterior, en virtud de que la Ley Federal del Derecho de Autor protege el derecho a la propia imagen en los casos en que la utilización de una imagen se hace sin el consentimiento del titular (artículo 87) y establece la posibilidad de recibir una indemnización específica por vulneración al derecho a la propia imagen (artículo 216 Bis) a través de una acción judicial de reparación del daño (artículo 213). Además, establece otros mecanismos para la defensa y protección del derecho a la propia imagen, tal como la avenencia (artículos 217 y 218) y el procedimiento de infracción administrativa (artículos 231 y 232)²³.
41. Resulta importante señalar que, si bien se reconoció que el derecho a la propia imagen y diversas medidas para su protección se encuentran reguladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, esta Sala precisó que ***a diferencia de los derechos***

---

²¹ Amparo directo en revisión 49/2013, página 26.

²² Parra Trujillo, Eduardo de la, *El derecho a la propia imagen*, México, Tirant lo Blanch/IPIDEC, 2014, pp. 197-198.

²³ Amparo directo en revisión 49/2013, páginas 26-27.

de autor -que nacen de la creación literaria o artística- el derecho a la propia imagen está indisolublemente ligado a la individualidad de la persona.²⁴

42. Por su parte, al resolver el **amparo directo en revisión 48/2015**²⁵ la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también analizó si el derecho a la propia imagen se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. A partir del análisis del artículo 28 Constitucional, concluyó que desde el marco constitucional se ha buscado promover la materia del derecho de autor, lo que dio lugar a la emisión de la ley reglamentaria correspondiente.
43. Después de analizar los antecedentes legislativos de la Ley, la Segunda Sala señaló que, desde la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en mil novecientos cuarenta y ocho, se buscó la protección de los derechos de los autores de una obra no solo con el objeto de proteger al autor de la obra, sino también a los sujetos que interactúan y participan en esa comunidad (agentes que intervienen en la producción, edición, distribución, comercialización y comunicación con el público en general). Es decir, se buscaba generar seguridad jurídica para todos los sujetos que se ubiquen en el ámbito de aplicación del derecho de autor.
44. Asimismo, atendiendo a la iniciativa de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente desde mil novecientos noventa y seis, la Segunda Sala precisó que el objetivo primordial de dicha iniciativa fue conciliar los intereses de los autores con la necesidad de la sociedad de acceder al conocimiento, pero también se estimó necesario que los derechos de los autores tuvieran límites. Con base en el análisis en comento, la Segunda Sala determinó que: “(...) *se puede concluir válidamente que la Ley Federal del Derecho de Autor tiene su fundamento a nivel constitucional en el artículo 28, **en donde se prevé una restricción legítima y válida al derecho***

---

²⁴ Ibid, página 25.

²⁵Resuelto en sesión de 27 de abril de 2016, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos -quien se separó de algunas consideraciones- y Presidente Alberto Pérez Dayán.

de autor, en tanto que su ejercicio encuentra justificación en la medida en que no transgreda el derecho a la imagen e intimidad de la persona retratada.²⁶

45. Consideraciones similares -en cuanto a la justificación de la regulación del derecho a la propia imagen en la Ley Federal del Derecho de Autor- fueron emitidas por esta Primera Sala al resolver el **amparo directo en revisión 3532/2018**²⁷ en el que, además -al analizar la constitucionalidad del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor-, se determinó que el legislador federal tiene competencia para legislar en materia del derecho a la propia imagen, pues dicha tutela se da en el marco específico del ejercicio del derecho de autor, por lo que, en términos del artículo 28 constitucional, es congruente que se prevea en la Ley autoral.²⁸

Derecho a la propia imagen como derecho fundamental que, en su caso, puede ser además un derecho de contenido patrimonial susceptible de explotación.

46. Al resolver el **amparo directo en revisión 24/2016**²⁹ esta Primera Sala definió al derecho a la propia imagen como un *“derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana, que no sólo protege la autonomía de las personas para decidir libremente la imagen con la que quiere mostrarse frente a la sociedad —una de cuyas manifestaciones es la “apariencia física”—, sino que además otorga poder de decisión sobre las representaciones o manifestaciones gráficas de esa imagen y los usos o finalidades que se pretenda dar a éstas. Así, en esta faceta el derecho*

²⁶ Amparo directo en revisión 48/2015, página 29.

²⁷ Resuelto en sesión de 10 de octubre de 2018, por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente) en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estuvo ausente.

²⁸ Amparo directo en revisión 3532/2018, página 29.

²⁹ Resuelto en sesión del 6 de diciembre de 2017, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó el derecho a formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta), quien igualmente se reservó el derecho a formular voto concurrente. Ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

fundamental a la propia imagen otorga a las personas una protección frente a los usos no consentidos de su imagen provenientes de terceros.”³⁰

47. Asimismo se precisó que, **para algunas personas, la propia imagen es un bien que puede tener un valor económico en el mercado.** En consecuencia, **bajo esa perspectiva, se debe concebir al derecho a la propia imagen como un derecho inmaterial de contenido patrimonial susceptible de explotación comercial. Por lo que, en dichos casos, su vulneración puede ocasionar daños materiales,** tal como acontece en los casos en que con la finalidad de obtener algún tipo de lucro se utiliza sin consentimiento la fotografía de quien suele obtener ingresos económicos por la comercialización de su imagen.³¹
48. En ese contexto, esta Primera Sala analizó la vulneración al derecho a la propia imagen de una persona considerada como “figura pública”³² y determinó que -en caso de estar en conflicto la libertad de información y el derecho a la propia imagen-, si bien conforme a lo determinado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las figuras públicas tienen menor resistencia que los particulares ante las intromisiones a los derechos de la personalidad asociadas al ejercicio de la libertad de expresión; por regla general *“siempre que se difunda la imagen de una persona se requiere el consentimiento de ésta, de tal manera que en principio no estará amparada por la libertad de información la publicación de una imagen sin el consentimiento del titular de ésta.”³³*
49. Asimismo, se precisó que, en caso de que exista *interés público* en la difusión, se actualiza un supuesto que justifica la difusión de la imagen de una persona sin su consentimiento. Conforme a la doctrina constitucional sobre interés público, se

---

³⁰ Amparo directo en revisión 24/2016, página 28.

³¹ Idem.

³² De acuerdo con el criterio establecido por esta Primera Sala, son figuras públicas los servidores públicos y los particulares con proyección pública. En ese sentido, se considera que un particular tiene proyección pública cuando por determinada situación adquiere cierta notoriedad que justifica el interés de la sociedad en conocer información relacionada con esta persona.

³³ Amparo directo en revisión 24/2016, página 30.

determinó que, en casos de personas privadas con proyección pública, existe *interés público directo* en la difusión de sus imágenes cuando éstas se encuentran realizando actividades en “espacios públicos” (calles, plazas públicas, oficinas gubernamentales, etc.), en “espacios privados” de acceso público (cines, teatros, estadios, centros comerciales, etc.) o incluso en “eventos privados” de interés general (entregas de premios, conferencias, etc.) y no exista una *expectativa justificada* de privacidad.

50. En consecuencia, cuando el contenido de la imagen de la persona se trata de una situación que pertenece exclusivamente a su vida privada, en caso de existir interés público este tendría que ser indirecto, pues no podría determinarse a partir del contenido de la imagen, sino que se debe **verificar si existe alguna conexión entre la imagen y algún aspecto de su vida profesional.** ³⁴

Indemnización por violación al derecho a la propia imagen conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.

51. Al resolver el **amparo directo en revisión 24/2016**, esta Primera Sala también precisó que, si bien en la Ley Federal del Derecho de Autor: **a)** se protege el derecho a la propia imagen en caso de la utilización sin el consentimiento del titular (artículo 87); **b)** se prevén diversos mecanismos para la defensa y protección de la propia imagen (avenencia y procedimiento de infracción administrativa); y **c)** se contempla la posibilidad de recibir una indemnización específica en términos del artículo 216 Bis; **en la legislación no se establece la posibilidad de reparar el daño moral causado por la vulneración del derecho a la propia imagen.**
52. En ese sentido se determinó que la Ley Federal del Derecho de Autor no permite reparar las violaciones al derecho a la propia imagen a través de una indemnización por daño moral, sin embargo, **dado que además de ser un derecho fundamental, en ciertos casos se trata de un derecho inmaterial que puede explotarse**

---

³⁴ Ibid, página 38.

comercialmente, la legislación autoral sí contempla la posibilidad de reclamar daños materiales por vulneración al derecho a la propia imagen. ³⁵

53. Respecto a la reparación del daño contemplado en la Ley Federal del Derecho de Autor, esta Primera Sala explicó que el artículo 216 Bis³⁶:

- Establece con claridad que la violación a los derechos que confiere la Ley puede dar lugar a la reparación del daño “material y/o moral”.
- Contempla una regla de facilitación probatoria respecto de la cuantificación del daño por infracciones a la ley autoral.
- Contiene una definición de “daño moral” para efectos de la legislación autoral, conforme a la cual éste solo puede ser causado con motivo de la vulneración de determinados “derechos morales autorales” previstos en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 21.

54. En ese contexto, se precisó que, dado que el artículo 87³⁷ de la Ley Federal del Derecho de Autor protege directamente el derecho a la propia imagen, ello implica

---

³⁵ Ibid, página 45.

³⁶ **Artículo 216 Bis.** La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior.

Para los efectos de este artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley.

³⁷ **Artículo 87.** El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó quién, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación.

Cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los fines pactados.

que se trata de uno de los derechos que -en términos del artículo 216 Bis- “confiere la ley” y, por lo tanto, pueden dar lugar a la reparación.

55. Es decir, si el derecho a la propia imagen es un derecho protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, en principio podría solicitarse que su violación se repare a través de la reparación del daño “material y/o moral” en términos de lo dispuesto en el artículo 216 Bis. Sin embargo, el propio artículo 216 Bis acota la reparación del daño a la violación de los “derechos morales autorales” previstos en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 21. En consecuencia, esta Sala concluyó que, **si el derecho a la propia imagen no puede ser considerado como un derecho autoral**, por mayoría de razón tampoco puede entenderse como un “derecho moral autoral”.³⁸ De ahí que **la vulneración al derecho a la propia imagen no puede dar lugar a la reparación del daño moral en términos de la legislación autoral.**
56. Por otra parte, tal como se relató en los antecedentes de esta resolución, derivado de la secuela procesal del presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el **amparo directo en revisión 4083/2020**³⁹. En dicho recurso esta Sala concluyó que estimar que los artículos 87 y 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor son inaplicables cuando se alega violación al derecho a la propia imagen transgrediría el derecho a una reparación integral, pues se impediría la indemnización a que se refiere el artículo 216 Bis referido.⁴⁰

No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.

Los derechos establecidos para las personas retratadas durarán 50 años después de su muerte.

³⁸ Amparo directo en revisión 24/2016, páginas 59 a 61.

³⁹Resuelto en sesión de 11 de agosto de 2021, por unanimidad de cinco votos de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se reserva el derecho de formular voto concurrente y, de los señores Ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

⁴⁰ De dicho precedente derivó la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 22/2022, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, 1a./J. 22/2022, 1a./J. 22/2022, página 683, de rubro: “DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO

57. Asimismo, en dicho precedente se reiteró que, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor no establece la posibilidad de reparar el daño moral causado por la violación al derecho a la propia imagen, dicha legislación sí contempla la posibilidad de reclamar daños materiales por su vulneración y los mecanismos para hacerlo. Además, esta Primera Sala precisó que lo anterior ocurre **bajo el entendido de que la indemnización por daño moral debe analizarse y fundarse en otros cuerpos normativos.**⁴¹
58. Posteriormente, en los **amparos directos en revisión 2216/2021**⁴² y **2217/2021**⁴³ se emitieron similares consideraciones en el sentido de que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor resulta aplicable a efecto de recibir una indemnización por daños materiales ocasionados por la vulneración al derecho a la propia imagen. Además, se determinó que el artículo **216 Bis no viola el principio de seguridad jurídica** previsto en el artículo 16 de la Constitución.
59. Lo anterior en virtud de que dicho principio implica que las normas jurídicas deben ser ciertas y claras, de modo que los gobernados sepan qué esperar en caso de que se actualice el supuesto normativo. De ahí que, el hecho de que en el artículo no se defina en qué consiste cada uno de los daños a que hace referencia, no implica violación a la garantía de seguridad jurídica, pues, en su caso, la falta de definición de términos debe establecerse a partir de los métodos interpretativos que pueden utilizar los titulares de órganos jurisdiccionales.⁴⁴

DE AUTOR ES APLICABLE PARA SU PROTECCIÓN CUANDO AQUÉLLA SE UTILIZA SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.”

⁴¹ Amparo directo en revisión 4083/2020, párrafo 99.

⁴² Resuelto en sesión de 17 de noviembre de 2021, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (Ponente) y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

⁴³ Resuelto en sesión de 17 de noviembre de 2021, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (Ponente) y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

⁴⁴ Amparo directo en revisión 2216/2021, párrafos 84 a 92.

60. Asimismo, se precisó que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor no establece la posibilidad de realizar un doble cobro por un mismo concepto, sino que atendiendo a la adición de la norma en la reforma del veintitrés de julio de dos mil tres, la disposición en comento tiene la finalidad de garantizar el derecho a una justa indemnización.⁴⁵

Análisis de la cuestión constitucional materia del presente asunto.

61. En el presente asunto, en primer lugar, la recurrente argumenta que el Tribunal Colegiado incumplió con lo resuelto por esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 4083/2020. Dicho argumento se considera **infundado** en virtud de que, tal como se ha relatado, al resolver dicho recurso esta Sala concluyó que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor sí resulta aplicable a efecto de determinar la reparación del daño material por violación al derecho a la propia imagen.
62. En cumplimiento a lo anterior, el Tribunal Colegiado de conocimiento emitió la sentencia que ahora se recurre y en ésta, conforme a los lineamientos precisados en el amparo directo en revisión 4083/2020, **determinó que resulta aplicable el artículo 216 Bis** referido; y **es precisamente la interpretación de esta norma cuya constitucionalidad la recurrente controvierte en el presente asunto.** De ahí lo infundado de su argumento.
63. Ahora bien, en sus diversos agravios la recurrente argumenta, en esencia, que la interpretación realizada por el Colegiado -en el sentido de que la indemnización por daño material derivada de la violación al derecho a la propia imagen debe ser calculada conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor- **es inconstitucional, pues restringe el derecho humano a una justa indemnización.**

---

⁴⁵ Ibid, párrafos 93 a 101.

64. En ese sentido, estima incorrecto lo considerado por el Tribunal en cuanto a que, en virtud de que el derecho a la propia imagen no es un derecho autoral, no puede ser reparado en términos del primer párrafo del artículo 216 Bis ya que los derechos que no son meramente autorales no cuentan con un “producto o servicio original” a que se refiere el primer párrafo en comento. Lo anterior, dado que, en consideración de la recurrente, es incorrecto el establecimiento de dos “categorías de derechos”, pues la norma no establece distinción alguna respecto de los derechos que tutela la Ley.
65. Conforme a la causa de pedir de la recurrente se advierte que, en su opinión, la reparación del daño causado por vulneración al derecho a la propia imagen forzosamente debe calcularse en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues estimar lo contrario implica una violación al derecho humano a una justa indemnización. Argumento que, como a continuación se desarrollará, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera incorrecto.
66. Toda vez que la recurrente cuestiona la constitucionalidad del artículo 216 Bis, párrafo segundo, de la Ley Federal del Derecho de Autor a partir de la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado, resulta necesario establecer la correcta interpretación de la norma para verificar si la interpretación realizada por el Tribunal se ajusta al marco constitucional, o no.

Interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

67. Como se ha precisado, en lo que interesa, el Tribunal Colegiado determinó que, contrario a lo argumentado por el Grupo Editorial quejoso, el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor resulta plenamente aplicable para determinar la indemnización por el daño causado con motivo de la violación al derecho a la propia imagen. Precisó que, dado que el derecho a la propia imagen no es un derecho autoral, no puede dar lugar a la reparación del daño moral en términos de la legislación autoral, sin embargo, sí puede dar lugar a una reparación del daño

material.

68. Lo anterior, en virtud de que **para algunas personas la propia imagen también es un bien que puede llegar a tener un valor económico y, en consecuencia, su violación puede dar lugar a una reparación del daño material.** En ese contexto, estimó que, contrario a lo determinado por la responsable, el uso indebido del derecho a la propia imagen no actualiza de manera necesaria e inmediata un daño material, sin embargo, en el caso, se encuentra acreditado que la recurrente suele obtener ingresos económicos por la comercialización de su imagen, de ahí que resulte procedente la reparación del daño material.
69. En cuanto a la forma de aplicar el artículo 216 Bis de la Ley, el Tribunal consideró que, en el caso, no es posible determinar la indemnización por daño material derivado de la violación al derecho a la propia imagen conforme al primer párrafo de la norma, esto es, atendiendo al 40% del precio de venta al público del “producto original o prestación original del servicio”.
70. Lo anterior, en virtud de que -a partir del análisis teleológico de la norma y de sus antecedentes legislativos- concluyó que los conceptos “producto original” o “prestación original del servicio” se refieren a conceptos propios del ámbito del derecho de autor. En consecuencia, dado que el derecho a la propia imagen no es un derecho autoral, no resultan aplicables dichos conceptos.
71. Por lo anterior, a efecto de determinar la indemnización por violación al derecho a la propia imagen, concluyó que se debe atender a lo dispuesto en el **segundo párrafo del artículo 216 Bis; disposición general que permite resolver todos los casos en los que no sea posible determinar la indemnización conforme al 40% (del precio de venta del producto o servicio original) a que se refiere el primer párrafo.**

72. Interpretación que, en consideración del Tribunal Colegiado, es congruente con el derecho a una justa indemnización y atiende a la intención del legislador, pues permite que el juez, con audiencia de peritos, fije el importe respectivo en función de los hechos particulares del caso. Estimar lo contrario, es decir, considerar que resulta aplicable el primer párrafo y forzar el concepto de “producto original” para entender por este -por ejemplo- la totalidad de las revistas en que se publicaron las imágenes materia de la controversia, llevaría a establecer una condena desproporcional y excesiva que se aleja de la intención de la norma.
73. Por su parte, la recurrente esencialmente sostiene que el simple uso indebido del derecho a la propia imagen actualiza de manera necesaria e inmediata los daños a que se refiere el artículo 216 Bis, por lo que no se requiere demostración alguna. Asimismo, que el artículo 216 Bis de la Ley establece de manera genérica que las violaciones a los derechos tutelados por la Ley deben ser cuantificados conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, sin que la norma establezca una distinción entre los derechos autorales y el derecho a la propia imagen. Considera incorrectos los razonamientos del Tribunal Colegiado en los que señala cuestiones de proporcionalidad y razonabilidad que lo llevaron a concluir que resulta aplicable el segundo párrafo de la norma.
74. Asimismo, señala que, atendiendo al principio *pro persona*, resulta aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo en comento, pues dicha porción de la norma implica una protección más amplia. Considera que, en el caso, existen elementos objetivos que permiten determinar el precio de venta al público de las revistas en las que se utilizó indebidamente la imagen de la recurrente. En consecuencia, con base en dicho precio es posible cuantificar la indemnización en términos del primer párrafo del artículo 216 Bis. Argumenta que la indemnización en términos del segundo párrafo de la norma resulta inconstitucional por violar el derecho humano a una justa indemnización y el principio *pro persona*.
75. Esta Sala considera que el Tribunal Colegiado interpretó y aplicó **correctamente** el

artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que lo llevó a la acertada consideración de que **la reparación del daño material ocasionado con motivo de la violación al derecho a la propia imagen debe calcularse en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo en estudio. Interpretación que garantiza el derecho humano a una justa indemnización.** Lo anterior, conforme a las siguientes consideraciones.

76. En primer lugar, se estima **infundado** lo argumentado por la recurrente en el sentido de que el simple uso indebido del derecho a la propia imagen actualiza de manera necesaria e inmediata los daños a que se refiere el artículo 216 Bis, por lo que no se requiere demostración alguna. Lo anterior en virtud de que, tal como se expuso en el apartado de doctrina constitucional sobre el derecho a la propia imagen, es criterio de esta Primera Sala que, **para algunas personas, la propia imagen es un bien que puede tener un valor económico en el mercado.** En consecuencia, **bajo esa perspectiva, se debe concebir al derecho a la propia imagen como un derecho inmaterial de contenido patrimonial susceptible de explotación comercial. Por lo que, en dichos casos, su vulneración puede ocasionar daños materiales.**
77. De ahí que se estime correcta la determinación del Tribunal Colegiado en el sentido de que, el uso indebido del derecho a la propia imagen no actualiza de manera necesaria e inmediata un daño material, pues es **necesario acreditar que, en su caso, el titular del derecho suele obtener ingresos económicos por la comercialización de su imagen;** aspecto que, en el caso, se encuentra fuera de debate.
78. Precisado lo anterior, resulta oportuno tener presente el contenido del artículo 216 Bis cuya interpretación se cuestiona.

Artículo 216 Bis. La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al **cuarenta por ciento**

del precio de venta al público del producto original o **de la prestación original de cualquier tipo de servicios** que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.

El juez **con audiencia de peritos fijará el importe** de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios **en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior.**

Para los efectos de este Artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 21 de esta Ley.

79. Conforme al criterio de esta Primera Sala, el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor tiene como finalidad garantizar una indemnización por la violación a los derechos tutelados por la Ley. La reparación del daño moral y/o material, así como la indemnización por daños y perjuicios **se sitúa en el campo de la responsabilidad civil y no tiene el propósito de castigar, sino más bien, de resarcir.** Por tanto, el precepto en estudio establece una regulación abstracta y general sin determinar situaciones jurídicas referidas a una persona o a un grupo de personas, ya que comprende a todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de violar los derechos tutelados por la Ley.⁴⁶
80. Tal como se explicó en el apartado de doctrina constitucional sobre el derecho a la propia imagen, si bien la Ley Federal del Derecho de Autor protege este derecho fundamental en los casos en que la utilización de una imagen se hace sin el consentimiento del titular (artículo 87) y establece la posibilidad de recibir una indemnización específica por vulneración al derecho a la propia imagen (artículo 216 Bis); **el derecho a la propia imagen no es un derecho de autor.** Mientras que los derechos de autor nacen de la creación literaria o artística, el derecho a la propia imagen está indisolublemente ligado a la individualidad de la persona.
81. A partir de lo anterior, es posible establecer que la finalidad del artículo 216 Bis de

---

⁴⁶ Amparo directo en revisión 4869/2019, párrafos 57 y 58.

la Ley Federal del Derecho de Autor es privilegiar a los titulares de los derechos protegidos (autorales o no), posibilitando que los daños causados sean **resarcidos** en concordancia con el beneficio obtenido por los infractores. Asimismo, conforme a lo expuesto en la presente resolución, se debe recordar que, **si el derecho a la propia imagen no puede ser considerado como un derecho autoral**, por mayoría de razón tampoco puede entenderse como un “derecho moral autoral”.⁴⁷ De ahí que la vulneración al derecho a la propia imagen no puede dar lugar a la reparación del daño moral en términos de la legislación autoral, pues en el propio artículo 216 Bis se acota la reparación del daño a la violación de los “derechos morales autorales” previstos en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 21.

82. En ese contexto, se estima **ineficaz** lo argumentado por la recurrente en cuanto a que el Tribunal Colegiado estableció dos “categorías” de derechos: los derechos autorales y los que no son meramente autorales, pues -en su opinión- el artículo 216 Bis establece de manera general que las violaciones cometidas a los derechos tutelados por la Ley deben ser cuantificados conforme a lo previsto en el primer párrafo.
83. Lo anterior, en virtud de que -contrario a lo argumentado por la recurrente y tal como se ha explicado en esta resolución-, si bien tanto el derecho de autor como el derecho a la propia imagen se encuentran protegidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y su vulneración puede dar lugar a la indemnización a que se refiere el artículo 216 Bis de la Ley, sí existen diferencias entre estos derechos y, por lo tanto, **la indemnización se debe determinar atendiendo al tipo de derecho vulnerado y conforme a los supuestos que del artículo 216 Bis resulten aplicables al caso concreto.**
84. De la literalidad del artículo 216 Bis se advierte que, ante la violación a los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, la norma establece una indemnización que en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público

---

⁴⁷ Amparo directo en revisión 24/2016, páginas 59 a 61.

del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio. Asimismo, el propio artículo también establece que, **en caso de que no sea posible determinar la indemnización conforme al precio del producto o servicio original, ésta será fijada por el Juez con la intervención de peritos.**

85. Dicho precepto legal fue incluido en la Ley Federal del Derecho de Autor mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil tres y entró en vigor el día siguiente de su publicación. La *Exposición de Motivos* correspondiente señaló lo siguiente:

“(...) Finalmente, en un acto de justicia, las Comisiones Unidas proponen adicionar el artículo 216 Bis, cuyo objetivo es el de garantizar que la indemnización, corresponda a la magnitud del daño ocasionado, cuando haya violaciones a los derechos que tutela la presente Ley”.

86. Conforme a lo anterior, es posible sostener que el objetivo de la referida norma es **garantizar que la indemnización a que tienen derecho los titulares de los derechos protegidos por la Ley, corresponda a la magnitud del daño ocasionado.**

87. De ahí que, ante la violación a los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece un sistema objetivo que permite determinar la indemnización por concepto de reparación del daño material y/o moral, así como por daños y perjuicios por violación a estos derechos (estrictamente autorales, o no), a saber:

- a) Atendiendo a, por lo menos, el 40% del precio de venta al público **del producto original o de la prestación original del servicio** que se haya realizado sin el pago de derechos correspondiente; o
- b) En caso de que no pueda determinarse conforme al cuarenta por ciento del precio original (del producto o servicio), la indemnización será fijada por el Juez con audiencia de peritos.

88. En ese contexto, contrario a lo argumentado por la recurrente, se estima acertada la determinación del Tribunal Colegiado en el sentido de que, atendiendo al desarrollo legislativo de la Ley autoral, los conceptos de “**producto original o prestación original del servicio**” **deben entenderse como conceptos dirigidos a cuestiones estrictamente autorales** y, en consecuencia, no es posible pretender establecer la indemnización por violación al derecho a la propia imagen con base en dichos conceptos. Lo anterior dado que -conforme a lo ya expuesto en los apartados precedentes-, si bien en la legislación se han establecido límites con el objeto de salvaguardar el derecho a la propia imagen, ello no implica que la totalidad de términos empleados en la Ley resulten aplicables, sin distinción alguna, a la regulación al derecho a la propia imagen.
89. Evidencia lo anterior lo determinado por esta Sala⁴⁸ en el sentido de que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 216 Bis, la violación al derecho a la propia imagen no da lugar a la reparación por daño moral conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo anterior bajo el entendido de que la indemnización por daño moral debe analizarse y fundarse en otros cuerpos normativos.
90. En ese sentido, resulta **inoperante** lo argumentado por la recurrente en cuanto a que, en el caso, existen elementos objetivos que permiten determinar el precio de venta al público de las revistas en las que se utilizó indebidamente la imagen de la recurrente y, en consecuencia, con base en dicho precio debe calcularse el 40% a que se refiere el primer párrafo del artículo 216 Bis. Lo que, en su consideración, se corrobora del ejercicio “hipotético” realizado por el Tribunal Colegiado.
91. Lo anterior en virtud de que, si bien fue incorrecto el procedimiento y cuantificación hipotética realizada por el Tribunal Colegiado pues, conforme a los razonamientos expuestos, no tenía ningún fin práctico; lo cierto es que tal como el Tribunal concluyó **-al estar frente a un caso de violación al derecho a la propia imagen**

---

⁴⁸ Conforme a lo resuelto en los amparos directos en revisión 4083/2020 y 2216/2021.

en donde no se actualiza la venta al público de un producto o servicio original- no resulta aplicable el primer párrafo de la norma.

92. Por otra parte, tal como señala la recurrente, al resolver el **amparo directo en revisión 4869/2019**⁴⁹ -derivado de un caso de **violación a derechos de autor** por parte de la propietaria de una **discoteca** por usar y/o ejecutar obras musicales en su establecimiento sin el pago correspondiente⁵⁰- esta Primera Sala se pronunció sobre el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en lo que interesa, por mayoría de tres votos⁵¹ concluyó que:

⁴⁹ Resuelto en sesión de 17 de noviembre de 2021 por mayoría de tres votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como de la Ministro Presidente Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). En contra de los manifestados por la Ministro Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes formularon voto particular.

⁵⁰ Derivado de un juicio ordinario civil, la empresa propietaria de una discoteca fue condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios con base en lo dispuesto por el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor por haber usado y/o ejecutado obras musicales en su establecimiento, sin el pago de las regalías correspondientes. En segunda instancia se confirmó dicha determinación.

La empresa promovió juicio de amparo directo en el que, en lo que interesa, planteó que el artículo 216 Bis era inconveniente e inconstitucional, pues la indemnización prevista por la norma es desproporcional y genera un tipo de usura y/o explotación. El Tribunal Colegiado negó el amparo al considerar que la indemnización prevista en el artículo 216 Bis no se trata de una pena inusitada o multa excesiva. Además, determinó que era correcto tomar como base para establecer la condena el precio de venta del producto o servicios originales, pues ese es el origen del lucro indebido.

En contra de la negativa de amparo, la propietaria de la discoteca interpuso recurso de revisión. En éste argumentó que la indemnización prevista en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor: a) permite la explotación del hombre por el hombre -prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-; y b) es violatoria del principio de seguridad jurídica, pues no precisa respecto de qué ingresos debe pagarse la indemnización.

⁵¹ De los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como de la Ministra Presidente Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). En contra de los manifestados por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes formularon voto particular.

El Ministro **Jorge Mario Pardo Rebolledo** formuló **voto concurrente** dado que, si bien compartió el sentido de la resolución, se apartó de la consideración del proyecto en el sentido de que el monto de la indemnización debe partir sobre la base del cuarenta por ciento de las ganancias totales que haya obtenido la empresa infractora lo que incluye: *covers*, bebidas y alimentos. En su opinión, en el caso concreto, el monto de la indemnización debía ser fijado por la autoridad jurisdiccional con audiencia de peritos. Lo anterior, al considerar que, en el caso, subsiste la dificultad para determinar cómo debe calcularse el lucro obtenido con la reproducción de los derechos protegidos, es decir: determinar cuáles y cuántas canciones se reprodujeron.

La Ministra **Norma Lucía Piña Hernández** formuló **voto particular** al considerar que lo previsto por el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el contexto de una infracción cometida

- (i) El artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor no resulta contrario a lo previsto por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dado que, en primer lugar, la figura de usura sólo se configura en casos derivados de un préstamo y no es aplicable en cualquier relación contractual respecto de penas convencionales o intereses moratorios.⁵² Asimismo, lo previsto por el artículo 216 Bis referido -al establecer que la reparación del daño en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original- no constituye explotación.

- (ii) Lo anterior, dado que la condena se da en virtud de que la actora acreditó la procedencia de su acción, pues la demandada no pagó las regalías por derechos de autor, lo que ocasionó que se le condenara también al pago de la indemnización por daños y perjuicios. Además, no se advierten condiciones desiguales o desproporcionadas, que constituyan un abuso de una persona frente a la otra y, sobre todo, no produce una afectación en la dignidad.⁵³

- (iii) El artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de autor no viola el derecho de seguridad jurídica, pues no se deja en estado de indefensión o en una situación de incertidumbre al gobernado. La norma impugnada tiene la finalidad de resarcir por los daños causados -en concordancia con el beneficio obtenido por los infractores y es clara al establecer que, ante la

---

por un negocio en el giro de discoteca, no debe interpretarse en el sentido de que al referirse la norma “*al precio de venta al público (...) de la prestación original de cualquier tipo de servicios*”, signifique que la indemnización por daños y perjuicios deba calcularse sobre el total de ingresos del establecimiento. Lo anterior en virtud de que, si bien este tipo de establecimiento realiza una actividad que vincula la venta de productos y servicios que tiene como principal atractivo o componente la comunicación pública de la música, técnicamente es posible diferenciar dichos servicios para efecto de establecer la base del cálculo del monto de la indemnización. En su opinión, en el caso, dicha base podía ser el costo de admisión al lugar el cual, en caso de controversia, puede ser establecido a juicio de peritos (en el caso el costo de admisión era conocido y estaba determinado).

El Ministro **Juan Luis González Alcántara Carrancá** formuló **voto particular** al considerar que, si bien el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es constitucional y convencional, se debía interpretar que la indemnización debe corresponder a la magnitud del daño ocasionado por la violación a los derechos protegidos en la Ley; es decir, se deben resarcir los daños en concordancia con el beneficio directo (o inmediato) obtenido por los infractores. En consecuencia, para poder cumplir con la proporcionalidad del daño causado, éste debía calcularse únicamente sobre los ingresos obtenidos directamente por el acto u omisión que resultaron contrarios a la legislación. Por lo tanto, en el caso, la indemnización debía ser fijada únicamente sobre el “cover” o cobro de acceso al establecimiento comercial del recurrente, y no sobre el resto de las actividades que realiza (venta de bebidas y alimentos).

⁵² Amparo directo en revisión 4869/2019, párrafo 65.

⁵³ *Ibidem*, párrafos 69 y 70.

violación a los derechos de autor, la indemnización respectiva en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio. Asimismo, en caso de que no sea posible determinar el precio del producto o servicio original, la indemnización se fijará con ayuda de peritos.

- (iv) En consecuencia, en caso de que no sea fácil establecer el precio de venta del producto o servicio ofertado, las autoridades jurisdiccionales están en posibilidad de llamar a peritos para determinar el valor. Por lo que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la norma no vulnera el derecho de seguridad jurídica, ya que es clara respecto del concepto al que se aplicará la indemnización (sobre el precio de venta del producto o servicio ofertado con violación al derecho de autor), y sólo en caso de no poder determinar el precio de venta, se acudirá a la opinión de peritos.⁵⁴

- (v) Ante la violación del derecho de autor a través de la prestación de un servicio en el que se utilizan elementos (música) protegidos, en el que pueden ofrecerse otros productos como alimentos y bebidas como parte del servicio -como en el caso de las discotecas-, se considera que el *precio de la prestación original del servicio* a que se refiere el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor debe incluir todos aquellos elementos que convergen en la violación a los derechos de autor.⁵⁵

- (vi) En el caso, esta Primera Sala consideró que: *“(…) cuando la ley señala que la indemnización será sobre el precio al público de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación al derecho de autor se refiere al total de los ingresos que obtiene el establecimiento con motivo de las actividades que incluyen el uso de música protegida por el derecho de autor, incluidos, entre otros, la venta de bebidas y alimentos. Lo anterior, pues esa actividad tiene fines de lucro indirecto, en la medida que la utilización de la música resulta en una ventaja o atractivo adicional, además de que la actividad preponderante del establecimiento comercial es precisamente el entretenimiento mediante la reproducción de obras musicales.”*⁵⁶

93. Sin embargo, tal como se aprecia, en dicho asunto se analizó un caso de **violación al derecho de autor derivado de la prestación de un servicio** (usar y/o ejecutar

---

⁵⁴ *Ibidem*, párrafo 93.

⁵⁵ *Ibidem*, párrafo 100.

⁵⁶ *Ibidem*, párrafo 121.

obras musicales en una discoteca) sin el pago correspondiente. De ahí que se estimó aplicable lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 216 Bis de la Ley pues en efecto, **al tratarse de la violación a derechos autorales, el concepto “prestación del servicio original” sí resultaba aplicable.**

94. Aunado a lo anterior, debe destacarse que en dicho precedente se estableció que, **en caso de que no sea posible determinar el precio del producto o servicio original, la indemnización a que se refiere el artículo 216 Bis, se fijará por el juez con audiencia de peritos**, lo que garantiza el principio de seguridad jurídica, pues no se deja en estado de indefensión o en una situación de incertidumbre al gobernado.
95. Asimismo, resulta oportuno destacar que, respecto a la indemnización a que se refiere el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, esta Primera Sala considera que -aun en los casos derivados de violación a derechos autorales- **en todos los supuestos en los que, dadas las circunstancias en las que se cometa la violación a los derechos protegidos por la ley, no sea posible determinar el “precio de venta al público del producto original o de la prestación original”, el Juzgador deberá proceder en términos del segundo párrafo del artículo referido por lo que, con audiencia de peritos y atendiendo a las pruebas ofrecidas por las partes en la secuela procesal con las que se tuvo por acreditada la violación a los derechos tutelados por la ley, deberá determinar la indemnización que resulte suficiente para resarcir al titular del derecho afectado.**
96. De igual forma, resulta oportuno recordar que, ante la violación a un derecho, esta Primera Sala ha determinado que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización como medida resarcitoria por los daños ocasionados.

97. En ese contexto, se estima que, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor se garantiza a los titulares de los derechos violados una reparación integral. Lo anterior, en virtud de que, **a partir de las circunstancias del caso, pruebas ofrecidas en el juicio y, atendiendo a las opiniones técnicas de peritos, el Juzgador contará con los elementos que resultan necesarios para decretar una condena que guarde proporción con los daños ocasionados.**⁵⁷
98. De ahí que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la indemnización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor no es violatoria del derecho humano a una justa indemnización, pues se enfoca en la conducta infractora y el daño causado. Tal como ya se expuso, la norma establece un sistema objetivo que contempla dos posibilidades a efecto de determinar la condena; lo que permite garantizar que ésta guarde la debida proporción. Aspecto que, contrario a lo planteado por la recurrente, sí resulta indispensable tener en consideración. Lo anterior, en virtud de que la finalidad de la norma es indemnizar al titular del derecho violado en relación con los daños causados.
99. En ese contexto, se precisa que, si bien la recurrente cuestiona los lineamientos específicos que conforme a lo determinado por el Tribunal Colegiado los peritos deberán tomar en consideración a efecto de determinar la indemnización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 216 Bis, no resulta procedente que esta Primera Sala se pronuncie sobre los mismos, pues ello no se trata de una cuestión propiamente constitucional.
100. Finalmente, resulta **infundado** el argumento de la recurrente en el sentido de que

---

⁵⁷ Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 31/2017, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, abril de 2017, página 752, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE."

la aplicación del segundo párrafo del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es violatoria del principio *pro persona*, pues, en su consideración, no se aplica la protección más amplia prevista en dicha norma.

101. Lo anterior, en virtud de que, si bien de conformidad con el artículo 1° constitucional las normas jurídicas deben ser interpretadas bajo el principio *pro persona*, favoreciendo la protección más amplia a la persona; lo cierto es que dicho principio no da pauta para atribuir a una norma general un contenido y alcance que no tiene.⁵⁸

102. En consecuencia, tal como se ha desarrollado en la presente ejecutoria, la interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor propuesta por la recurrente no tiene cabida.

(...)

---

⁵⁸ Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 104/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 906, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."